Cuerpo Superior Técnico de la Administración de la Seguridad Social

Diego Lozano Torres (autor de contacto)

Eva Doblas Sestafe

Alba Melero Gil

Personal funcionario en prácticas del Cuerpo Superior Técnico de la Administración de la Seguridad Social (España)

Extracto

En el presente caso práctico se reproduce el enunciado del supuesto que se planteó como tercer ejercicio en la convocatoria de la oposición para el ingreso en el Cuerpo Superior Técnico de la Administración de la Seguridad Social, efectuada por la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 11 de abril de 2023 (BOE de 18 de abril). En el mismo se lleva a cabo un análisis de las cuestiones derivadas del planteamiento, incorporando la fundamentación jurídica de las respuestas a tales cuestiones, siguiendo la legislación vigente en la fecha de la realización del examen, que tuvo lugar el 27 de octubre de 2023.

Palabras clave: caso práctico; encuadramiento; alzada; jubilación; incapacidad permanente; ingreso mínimo vital.

Recibido: 14-07-2024 / Aceptado: 19-07-2024 / Publicado: 06-09-2024

Cómo citar: Lozano Torres, D., Doblas Sestafe, E. y Melero Gil, A. (2024). Cuerpo Superior Técnico de la Administración de la Seguridad Social. *Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF*, 482, 193-207. <https://doi.org/10.51302/rtss.2024.22469>

Senior Corps of Technicians of Social Security Administration

Diego Lozano Torres (contributing author)

Eva Doblas Sestafe

Alba Melero Gil

*Civil servant trainees in the Senior Technical Corps
Social Security Administration (Spain)*

Abstract

This practical case study reproduces the statement of the case that was presented as the third exercise in the competitive examination for entry into the Senior Technical Corps of the Social Security Administration, carried out by the Resolution of the Undersecretariat of the Ministry of Inclusion, Social Security and Migration of 11 April 2023 (BOE of 18 April). It analyses the questions arising from the questionnaire, incorporating the legal grounds for the answers to these questions, in accordance with the legislation in force on the date of the examination, which took place on 27 October 2023.

Keywords: case study; framing; appeal; retirement; permanent incapacity; minimum vital income.

Received: 14-07-2024 / Accepted: 19-07-2024 / Published: 06-09-2024

Citation: Lozano Torres, D., Doblas Sestafe, E. y Melero Gil, A. (2024). Senior Corps of Technicians of Social Security Administration. *Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF*, 482, 193-207. <https://doi.org/10.51302/rtss.2024.22469>

Enunciado

Félix García, nacido en 1980, ingeniero industrial, empezó a trabajar por cuenta ajena, en la empresa Reparaciones Atenea, SL el 1 de enero de 2004. Posteriormente adquirió el 5 % del capital de la sociedad, desempeñando, además, desde 2018, el puesto de director gerente. En 2022 percibió, por ello, una retribución mensual, en concepto de sueldo y complemento por especial disponibilidad horaria, de 2.500 euros mensuales, más un plus de transporte de 115 euros al mes, y otro de 600 euros por estudios de hijos del empleado. La empresa, además, realiza aportaciones a un fondo de pensiones de empleo consistente en una cantidad lineal de 300 euros mensuales por cada uno de sus trabajadores. Finalmente, tiene derecho a dos pagas extraordinarias por año, equivalentes cada una de ellas a una mensualidad de sueldo y complemento de especial disponibilidad. El 1 de enero de 2023 pasa a ser propietario del 60 % del capital de la sociedad, sin que nadie comunicase nada al respecto a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Respecto de la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, la empresa, que tiene el riesgo cubierto con una mutua colaboradora de la Seguridad Social, está acogida al código CNAE 33 (reparación e instalación de maquinaria y equipo), si bien para 4 de sus 30 empleados escogió la ocupación «A». Estos 4 empleados realizan habitualmente trabajos de oficina en la sede social de la empresa, aunque una o dos veces por semana se desplazan al taller de esta y/o domicilio de los clientes para consensuar detalles técnicos que pueden influir en la facturación final a los mismos.

El 15 de enero de 2023 la empresa recibe, sin previa notificación de ninguna naturaleza, una providencia de apremio por unas bonificaciones indebidamente practicadas durante parte del ejercicio 2022. Tras diversas consultas, decide impugnarlas, presentado el oportuno recurso el 28 de febrero de 2023.

En marzo de 2023, la empresa recibe la visita de un inspector de Trabajo y Seguridad Social.

En otro orden de cosas, Margarita López, informática de la empresa Reparaciones Atenea, causa derecho el 3 de enero de 2022 a una jubilación parcial, con 63 años de edad. Para ello, suscribió un contrato a tiempo parcial con la empresa, con una reducción de jornada del 50 %, que empezó a desarrollar a partir del 4 de enero de 2022, realizando las mismas funciones como informática que cuando trabajaba a tiempo completo. Como ya quedó dicho, la empresa tiene cubiertas las contingencias comunes y profesionales con una mutua colaboradora de la Seguridad Social.

Margarita, a partir de mediados del mes de abril de 2022, comienza con unas molestias de espalda y, tras varias pruebas, su médico de atención primaria le expide la baja con fecha 3 de mayo de 2022 por enfermedad común. Tras varias intervenciones quirúrgicas, su médico de atención primaria expide con fecha de 1 de diciembre de 2022 un alta con propuesta de incapacidad.

Por parte de la Dirección Provincial del INSS, se inicia el procedimiento para, en su caso, declarar la situación de incapacidad permanente, que se impulsará de oficio en todas sus fases (art. 4 del RD 1300/95 y art. 6 de la OM de 18 de enero 1996). El procedimiento finaliza con resolución de fecha de 3 de enero de 2023 del director/a provincial en la que se reconoce a Margarita una incapacidad permanente en grado de total para su profesión habitual. Margarita recibe el 15 de enero de 2023 la resolución. A partir de esa fecha, Margarita decide no volver a trabajar.

Margarita López tiene un hijo, Francisco, nacido el 1 de mayo de 1992, y forman una familia monoparental. Francisco los fines de semana realiza un voluntariado en un banco de alimentos y allí conoce a una pareja de jóvenes, Carmen Martínez y Manuel Juanes, que todas las semanas acuden a recoger una ayuda alimentaria, y les facilita un tríptico informativo del INSS sobre como solicitar el ingreso mínimo vital (IMV).

Carmen Martínez nació el 16 de julio de 2003 y Manuel Juanes, el 18 de marzo de 2002; tienen un hijo en común, Raúl, nacido el 13 de enero de 2022. Viven en una infravivienda de la calle Gumersindo, número 20, y están empadronados en dicha vivienda desde el 11 de noviembre de 2021, con la excepción de su hijo, que figura empadronado en dicho domicilio en la misma fecha de su nacimiento.

Carmen Martínez y Manuel Juanes se personan en un CAISS el 2 de enero de 2023 y presentan solicitud de IMV con esa misma fecha. En la citada solicitud declaran que son españoles (aportando el DNI y libro de familia), solteros, no son administradores de sociedades, no trabajan, están inscritos como demandantes de empleo, en el año anterior no han tenido ingresos por ningún concepto, no poseen bienes muebles o inmuebles a su nombre y tienen un hijo en común.

La entidad gestora, a través de los distintos cruces que tiene con las distintas Administraciones (Agencia Tributaria, INE, SEPE, etc.), confirma que los datos declarados son ciertos.

Preguntas

1. Examine la situación de alta de Félix García en 2022 y 2023, determinando cuál sería el régimen de Seguridad Social aplicable y los conceptos cotizables, según las circunstancias del caso.

2. Calcule la base de cotización y las cuotas a ingresar por Seguridad Social y, en su caso, por concepto de recaudación conjunta, de Félix García en el mes de noviembre de 2022.

3. Examine y razone los motivos que, en el presente caso, podrían justificar plausiblemente la impugnación presentada por Reparaciones Atenea, y la resolución que ante ellos debería adoptar la Tesorería General de la Seguridad Social.

4. Explique y razone qué consecuencias podrían derivarse de la visita del inspector de Trabajo y Seguridad Social.

5. Razone y justifique jurídicamente si durante la percepción de la jubilación parcial:

- a) ¿Margarita tendría derecho al complemento para la reducción de la brecha de género? ¿Margarita podría ser considerada pensionista a efectos de asistencia sanitaria y gasto farmacéutico?
- b) Incidencia de la baja médica y la posterior alta del servicio público de salud con propuesta de incapacidad permanente en la prestación de jubilación parcial, así como en la dinámica del derecho y abono de la prestación de incapacidad temporal de Margarita.

6. Una vez declarada y reconocida la incapacidad permanente total para su profesión habitual de Margarita:

- a) Razone y justifique jurídicamente la incidencia del reconocimiento de la incapacidad permanente total sobre la prestación de jubilación parcial.
- b) Razone y justifique jurídicamente si se podría incrementar o complementar la prestación de incapacidad permanente de Margarita.
- c) ¿Qué ocurriría si Margarita, en el momento de causar derecho a la prestación de incapacidad permanente, hubiera cumplido su edad ordinaria de jubilación?

7. En relación con la solicitud del IMV efectuada por Carmen Martínez y Manuel Juanes, razone jurídicamente si cumplen los requisitos de acceso a la prestación (unidad de convivencia, residencia, vulnerabilidad económica, etc. Determine cuál debería ser el sentido de la resolución de esta entidad gestora e importe de la prestación en su caso.

Solución

1. Examine la situación de alta de Félix García en 2022 y 2023, determinando cuál sería el régimen de Seguridad Social aplicable y los conceptos cotizables, según las circunstancias del caso.

En primer lugar, Félix García en el año 2022, aun teniendo un 5 % del capital de la sociedad en la que desempeña su trabajo, es un trabajador por cuenta ajena, ya que con base en el artículo 136.2 c) del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre (de aquí en adelante, TRLGSS), lo será siempre que no posea su control en los términos previstos en el artículo 305.2 b) de esa misma ley, y a pesar de realizar funciones de dirección y gerencia, como venía ocupando Félix desde 2018, aunque esta condición le hace ser asimilado a cuenta ajena, por lo que estaría excluido de desempleo y del Fondo de Garantía Salarial; tal y como se dice en el propio enunciado. Por lo tanto, su régimen de Seguridad Social aplicable sería el régimen general.

No obstante, en 2023, el 1 de enero, Félix García ya es propietario del 60 % del capital de la sociedad a la que estaba prestando sus servicios, por lo que según el artículo 305.2 b) del TRLGSS mantiene el control efectivo de la empresa y además continúa desempeñando funciones de dirección y gerencia, al ser director gerente. Es decir, ha de encuadrarse en el régimen especial de trabajadores autónomos o por cuenta propia (RETA).

Por otra parte, si nos referimos ya a los conceptos cotizables, nos hemos de fijar en los artículos 147 del TRLGSS y 23 del Reglamento general de cotización y liquidación de otros derechos, aprobado por el Real Decreto 2064/1995 (en adelante, RGCL). Con base en ello podemos observar, al menos para el régimen general, que la base de cotización está constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación que, con carácter mensual, tenga derecho a percibir el trabajador o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena sin otras exclusiones que los conceptos retributivos no computables determinados expresamente que se apuntan en los puntos segundos de sendos artículos citados más arriba. Así pues, en el año 2022 los conceptos por los que tendría que cotizar serían:

- Sueldo y complemento especial de disponibilidad horaria de 2.500 euros.
- Plus de transporte: 115 euros.
- Plus estudios de hijos: 600 euros.
- Fondo de pensiones de empleo: 300 euros.
- Pagas extraordinarias: 5.000 euros/12.

En 2023, cuando ya pasa a ser autónomo, según los artículos 308 y 309 del TRLGSS en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/2022, de 26 de julio (BOE de 27 de julio), y el artículo 44 del RGCL, la base de cotización en el RETA está constituida por todos los rendimientos netos obtenidos por el trabajador durante cada año natural, por sus distintas actividades profesionales o económicas, aunque el desempeño de algunas de ellas no determine su inclusión en este sistema de la Seguridad Social y con independencia de las que realice a título individual.

2. Calcule la base de cotización y las cuotas a ingresar por Seguridad Social y, en su caso, por concepto de recaudación conjunta, de Félix García en el mes de noviembre de 2022.

La base de cotización se encuentra constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación que, con carácter mensual, tenga derecho a percibir el trabajador o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena, sin otras exclusiones que los conceptos retributivos no computables determinados expresamente.

En noviembre de 2022, Félix realizaba una actividad laboral como trabajador por cuenta ajena asimilada según el artículo 136 c) del TRLGSS.

La base de cotización del mes de noviembre se encuentra integrada por los 2.500 euros de sueldo en virtud del artículo 147 del TRLGSS, cantidad a la que hay que sumar:

- Los 115 euros de plus de transporte, ya que no se trata de uno de los supuestos de gastos excluidos de cotización, contemplados en el apartado segundo del artículo 147 del TRLGSS y el artículo 23.2 del RGCL.
- Los 600 euros por estudios de hijos del empleado, en virtud del artículo 23.1 c) del RGCL.
- Los 300 euros de las aportaciones a un fondo de pensiones de empleo, valoradas por la totalidad de su importe de acuerdo con el artículo 23.1 a) del RGCL.
- Y, además, la cuantía de las 2 pagas extraordinarias formadas por el sueldo y el complemento especial de disponibilidad $[(2.500 \times 2) / 12 = 416,66 \text{ €}]$, en virtud del artículo 147.1 del TRLGSS.

Siendo una suma total de $2.500 + 115 + 600 + 300 + 416,66 = 3.931,66$ euros.

Los tipos de cotización aplicables, conforme al artículo 4 de la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2023, y las cuotas resultantes son:

- Para las contingencias comunes, el 28,30 %, del que el 23,60 % será a cargo de la empresa y el 4,70 %, a cargo del trabajador.

$3.931,66 \times 23,60 \% = 927,87$ a cargo de la empresa y $3.931,66 \times 4,70 \% = 184,78$ euros a cargo del trabajador.

- Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.

Por IT 2 % y por IMS 1,85 %; total 3,85 %: $3.931,66 \times 3,85 \% = 151,36$ euros.

- Para el mecanismo de equidad intergeneracional, el 0,6 % aplicable sobre la base de cotización por contingencias comunes, del que el 0,5 % será a cargo de la empresa y el 0,1 %, a cargo del trabajador.

$3.931,66 \times 0,5 \% = 19,65$ a cargo de la empresa y $3.931,66 \times 0,01 \% = 3,93$ a cargo del trabajador.

- Para formación profesional, el 0,70 %, del que el 0,60 % corre a cargo de la empresa y el 0,10 %, a cargo del trabajador.

$3.931,66 \times 0,60 \% = 23,58$ a cargo del empresario y $3.931,66 \times 0,1 \% = 3,93$ a cargo del trabajador.

No cotiza por desempleo ni FOGASA, ya que durante noviembre de 2022 Félix es trabajador por cuenta ajena asimilado y se encuentra excluido de estas.

3. Examine y razone los motivos que, en el presente caso, podrían justificar plausiblemente la impugnación presentada por Reparaciones Atenea, y la resolución que ante ellos debería adoptar la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el caso analizado, se trata una impugnación de una providencia de apremio por bonificación indebidamente practicada, la cual se recibió sin previa notificación alguna, motivo por el cual puede considerarse que se trata de una providencia de apremio directa.

Conforme al artículo 85 del Reglamento generación de recaudación de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (en adelante, RGRSS), podemos encontrar supuestos en los cuales procede la expedición de una providencia de apremio, como se recoge en el señalado precepto:

Artículo 85. *Providencia de apremio: casos en que procede.*

1. Se dictará providencia de apremio, sin previa reclamación de deuda o acta de liquidación, en los siguientes casos:

[...]

b) Falta de ingreso de las cuotas relativas a trabajadores cuya cotización se determine mediante el sistema de liquidación simplificada, con arreglo a lo previsto en los artículos 19.1 c) y 26.4 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social y en los artículos 15 y siguientes del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.

Sin embargo, conforme a las previsiones del artículo 86 del RGRSS conviene tener presentes la fecha de la notificación de la mencionada providencia de apremio (circunstancia que acaece el 15 de enero de 2023) y, a su vez, la fecha de presentación de la impugnación (producida el 28 de febrero de 2023):

Artículo 86. Impugnación de la providencia de apremio.

1. Contra la providencia de apremio solamente será admisible recurso de alzada basado en los motivos, debidamente justificados, que a continuación se especifican:

[...]

e) Falta de notificación de la reclamación de deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que estas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Indicándose dicho plazo en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

Artículo 122. Plazos.

1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

Del contenido del supuesto analizado, la presentación de la impugnación se habría producido transcurrido el mes desde la notificación de la providencia de apremio, por lo que el recurso sería extemporáneo.

4. Explique y razone qué consecuencias podrían derivarse de la visita del inspector de Trabajo y Seguridad Social.

De la visita del inspector de Trabajo y Seguridad Social se derivará la consecuencia de la determinación como incorrecta de la inclusión de los 4 trabajadores en la ocupación A (recogida en el cuadro II de la Tarifa para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), ya que para ello los trabajadores deben desarrollar su actividad laboral únicamente en los lugares destinados a oficinas de la empresa, y tal y como dispone

el enunciado, los 4 trabajadores de la empresa se desplazan una o dos veces por semana al taller y/o domicilio de los clientes. Todo ello en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 4.^a de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, y el artículo 6.5 de la OM PCM/74/2023.

Por tanto, deriva de esta situación una infracotización por parte de la empresa por estos trabajadores, y procede entonces un procedimiento recaudatorio, ya sea reclamación de deuda o acta de liquidación en función de si se realizase valoración jurídica.

Por otro lado, no se ha procedido por la empresa a la comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el cambio de Félix, que estaba encuadrado en el régimen general, al RETA desde el 1 de enero de 2023.

Con base en el artículo 60.2 del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (en adelante, RIA), el alta indebida en un régimen del sistema de la Seguridad Social de personas incluidas en el campo de aplicación de otro régimen distinto será válida hasta la fecha que se fije en la resolución administrativa que declare indebida el alta anterior y, en su defecto, hasta el último día del mes de su notificación.

Las cotizaciones efectuadas conforme a las normas del régimen en el que el alta se declare indebida serán computadas recíprocamente, a efectos de la protección que corresponda, con las del régimen de inclusión precedente.

Por ello puede la ITSS expedir la correspondiente acta de infracción, con la sanción que corresponda, motivada por la falta de comunicación de esta situación, según lo estipulado en el texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones del orden social.

5. Razone y justifique jurídicamente si durante la percepción de la jubilación parcial.

a) ¿Margarita tendría derecho al complemento para la reducción de la brecha de género? ¿Margarita podría ser considerada pensionista a efectos de asistencia sanitaria y gasto farmacéutico?

En cuanto a la primera de las cuestiones, bien es cierto que, conforme al apartado 1 del artículo 60 del TRLGSS, serán beneficiarias aquellas mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad. No obstante, se excluye expresamente en los casos de jubilación parcial, pero se reconocerá el complemento que proceda cuando desde la jubilación parcial se acceda a la jubilación plena; por tanto, de momento no tendrá derecho alguno hasta que acceda a esta última, tal y como se expone en el apartado 4 de ese mismo artículo citado anteriormente.

Por otra parte, Margarita deberá ser considerada pensionista a efectos de asistencia sanitaria y gasto farmacéutico, ya que según el artículo 17 del Real Decreto 1131/2002, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial, «el jubilado parcial tendrá la condición de pensionista a efectos del reconocimiento y percepción de las prestaciones sanitarias, tanto médicas como farmacéuticas, así como de las prestaciones de servicios sociales».

b) Incidencia de la baja médica y la posterior alta del servicio público de salud con propuesta de incapacidad permanente en la prestación de jubilación parcial, así como en la dinámica del derecho y abono de la prestación de incapacidad temporal de Margarita.

Para poder determinar la incidencia de la situación de incapacidad temporal con la jubilación parcial es preciso acudir al Real Decreto 1131/2002, en concreto a su artículo 14, en el que se determina la compatibilidad e incompatibilidad de la prestación de jubilación parcial.

1. La pensión de jubilación parcial será compatible:

[...]

b) Con la pensión de viudedad, la prestación de desempleo, y con otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones que correspondieran a los trabajos a tiempo parcial concertados con anterioridad a la situación de jubilación parcial [...].

Se entiende entonces que la incapacidad temporal se constituye como una prestación sustitutoria de las retribuciones y es así compatible con la jubilación parcial.

En cuanto al abono de la misma, debemos acudir a la disposición adicional segunda de la Orden ministerial ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, donde se establece que el subsidio de IT de los jubilados parciales, con independencia de la contingencia generadora, se abona en régimen de pago directo por la entidad gestora o colaboradora pertinente, que ha de informar a la empresa del inicio del abono del subsidio, así como de su finalización.

6. Una vez declarada y reconocida la incapacidad permanente total para su profesión habitual de Margarita:

a) Razone y justifique jurídicamente la incidencia del reconocimiento de la incapacidad permanente total sobre la prestación de jubilación parcial.

Según el artículo 14 apartado 2 letra c) del Real Decreto 1131/2002, la jubilación parcial es incompatible con la pensión de incapacidad permanente total para el trabajo que se preste

en virtud del contrato que dio lugar a la jubilación parcial. Por tanto, cuando se reconozca la incapacidad permanente total, se procederá a extinguir la jubilación parcial inmediatamente.

b) Razone y justifique jurídicamente si se podría incrementar o complementar la prestación de incapacidad permanente de Margarita.

Podría complementarse con el complemento para la reducción de la brecha de género regulado en el artículo 60 del TRLGSS; dispone este que las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas (y que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad) tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija, debido a la incidencia que, con carácter general, tiene la brecha de género en el importe de las pensiones contributivas de la Seguridad Social de las mujeres.

El importe del complemento de brecha de género sería de 30,40 euros por hijo, conforme a lo establecido en la disposición adicional de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, desarrollada por la disposición adicional sexta del Real Decreto 1058/2022, de 27 de enero, sobre revalorización de las pensiones de la Seguridad Social para el ejercicio 2023.

El derecho al complemento por cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre que no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor, y si este otro es también mujer, se reconocerá a aquella que sea titular de pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.

También debe destacarse la posibilidad de complementos por mínimos, regulado en el artículo 59 y la disposición transitoria 27.^a del TRLGSS y en el artículo 10.1 del Real Decreto 1716/2012.

En virtud del artículo 59 del TRLGSS se dispone que los beneficiarios de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social que no perciban rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas, de régimen de atribución de rentas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o que, percibiéndolos, no excedan de la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, siempre que residan en territorio español en los términos que legal o reglamentariamente se determinen.

Dada la fecha en que se reconoce la pensión de incapacidad permanente a Margarita, para la determinación de los correspondientes complementos a mínimos de la prestación habría que estarse a las previsiones del artículo 43 de la Ley 31/2022, de 27 de diciembre, y artículos 6 y 7 del Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre.

c) ¿Qué ocurriría si Margarita, en el momento de causar derecho a la prestación de incapacidad permanente, hubiera cumplido su edad ordinaria de jubilación?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 195.1 párrafo segundo del TRLGSS, no se reconocerá el derecho a la prestación de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes, cuando, en la fecha del hecho causante, se tenga la edad prevista en el artículo 205.1 a), y siempre y cuando se reúnan los demás requisitos establecidos para acceder a la pensión de jubilación.

7. En relación con la solicitud del IMV efectuada por Carmen Martínez y Manuel Juanes, razone jurídicamente si cumplen los requisitos de acceso a la prestación (unidad de convivencia, residencia, vulnerabilidad económica, etc.). Determine cuál debería ser el sentido de la resolución de esta entidad gestora e importe de la prestación en su caso.

Para poder determinar jurídicamente si se tiene derecho al IMV por parte de Carmen y/o Manuel, son varias las situaciones a analizar al amparo de lo establecido en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital (en adelante, LIMV).

Primeramente, a efectos de determinar el posible beneficiario o los posibles beneficiarios de la prestación, debemos valorar los artículos 4 y 6 de la LIMV:

Artículo 4. Personas beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital:

a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia en los términos establecidos en esta ley.

b) Las personas de al menos 23 años que no se integren en una unidad de convivencia en los términos establecidos en esta ley, siempre que no estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.

Artículo 6. Unidad de convivencia.

1. Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

En vista de lo expuesto en dichos artículos, debe reflejarse que no se cumplen los requisitos oportunos para poder ser determinados como una unidad de convivencia a ambos progenitores junto con el menor, dado que, pese a residir en un mismo domicilio, no se encuentran unidos por vínculo matrimonial ni podrán ser considerados como pareja de hecho.

Ante esto debemos considerarles unidad de convivencia de forma individual a uno solo de los progenitores para con el hijo, al amparo de lo establecido en el artículo 5:

Artículo 5. Titulares del ingreso mínimo vital.

[...]

2. Las personas titulares, cuando estén integradas en una unidad de convivencia, deberán tener una edad mínima de 23 años, o ser mayores de edad o menores emancipados en caso de tener hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente o huérfanos absolutos cuando sean los únicos miembros de la unidad de convivencia y ninguno de ellos alcance la edad de 23 años.

Sin embargo, podría acudir al artículo 9, con base en el riesgo de exclusión, y determinarse que, pese a no cumplirse los requisitos del artículo 6, ambos podrán ser titulares:

Artículo 9. Convivientes sin vínculo de parentesco.

Quando convivan en el mismo domicilio personas entre las que no concurren los vínculos previstos en el artículo 6, podrán ser titulares del ingreso mínimo vital aquella o aquellas que se encuentren en riesgo de exclusión de conformidad con lo previsto en el artículo 21.10.

En segundo lugar, en cuanto a los requisitos que se deben cumplir:

Artículo 10. Requisitos de acceso.

1. Todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de convivencia, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. [...]

b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en los términos establecidos en el artículo 11.

Además, dada la edad, debe tenerse en cuenta también el siguiente requisito:

2. Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1 b) que sean menores de 30 años en la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital, deberán acreditar haber vivido de forma independiente en España, durante al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la indicada fecha. Este requisito no se exigirá a las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes comunidades autónomas.

Y en relación con la unidad de convivencia:

3. Cuando las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia, se exigirá que la misma esté constituida, en los términos de los artículos 6, 7 y 8, durante al menos los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud, de forma continuada.

Este requisito no se exigirá en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente de menores, reagrupación familiar de hijas e hijos menores de edad, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, o en otros supuestos justificados que puedan determinarse reglamentariamente.

Debe tenerse en cuenta a su vez:

4. Los requisitos relacionados en los apartados anteriores deberán cumplirse en el momento de presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisión, y mantenerse al dictarse la resolución y durante el tiempo de percepción del ingreso mínimo vital.

Y por último, en cuanto a la cuantía a percibir, conforme al artículo 12:

El ingreso mínimo vital consistirá en una prestación económica que se fijará y se hará efectiva mensualmente en los términos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo.

Se establece en el artículo siguiente (art. 13) que la cuantía vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, según lo establecido en el apartado siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, en los términos establecidos en los artículos 11, 16 y 19, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.

A su vez, dada la existencia de un hijo menor de 3 años, debería sumarse a la cuantía determinada un complemento de ayuda para la infancia de 100 euros, conforme al artículo 11.6 de la LIMV.